

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, veintitrés (23) de marzo de dos mil veintidós (2022)

AUTO INTERLOCUTORIO

MAGISTRADO PONENTE: FERNANDO AUGUSTO GARCÍA MUÑOZ

MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
EXPEDIENTE	76001-23-33-000-2020-01096-00
DEMANDANTE	JULIAN EDUARDO VELASQUEZ VACA julianvelasquezv@gmail.com Apoderados jorge.echeverri@gmail.com juliaizabel@gmail.com
DEMANDADO	NACIÓN- MINISTERIO DE MINAS y ENERGÍA- AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA notijudiciales@minenergia.gov.co menergia@minenergia.gov.co Notificacionesjudiciales-anm@anm.gov.co
ASUNTO:	AUTO INADMITE DEMANDA

I. ANTECEDENTES

El señor **JULIAN EDUARDO VELASQUEZ VACA**, a través de apoderado judicial, mediante el ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA, demanda a la **NACIÓN- MINISTERIO DE MINAS y ENERGÍA- AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA**, con la cual pretende¹:

- (...)
1. Que la jurisdicción contencioso-administrativa proceda a anular el Acto Administrativo emanado de la Agencia Nacional de Minería radicado No. 20195000265181 de fecha 26 de diciembre de 2019, que desatiende los fundamentos y pretensiones del actor, negando que se tratase de una relación de tipo laboral que lo vinculaba a él con la Agencia Nacional de Minería - ANM.
 2. Que se declare que entre el actor y el INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGIA Y MINERIA (INGEOMINAS), el SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO y la AGENCIA NACIONAL de MINERÍA (ANM) se celebraron de manera casi ininterrumpida desde el 01 de julio de 2004 hasta el 5 de diciembre del 2017, sucesivos contratos y/o órdenes de prestación de servicios profesionales.
 3. Que se reconozca oficialmente que entre el INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERIA (INGEOMINAS), el SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO y la AGENCIA NACIONAL de MINERÍA (ANM) existió frente al actor una relación laboral regulada por contrato de trabajo realidad desde el 1 de julio de 2004 hasta el día 5 de diciembre del 2017.
 4. Que se reconozca oficialmente que los contratos de prestación de servicios y órdenes de trabajo y/o de prestación de servicios que se describen en el punto 1 de los Hechos, celebrados entre el actor y el INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA (INGEOMINAS), el SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO y la AGENCIA NACIONAL de MINERÍA (ANM), en realidad correspondían a contratos de carácter laboral, por desprenderse de ellos la prestación personal de un servicio, la subordinación y la remuneración.
 5. Que se reconozca que tales contratos y órdenes de prestación de servicio respondían a una relación de tipo laboral, que generaban prestaciones sociales.

¹[https://etbcsj.sharepoint.com/:b/r/teams/Secretaria2TRIBUNALADMINISTRATIVODELVALLE/Exp%20ORDINARIOS/76001-23-33-000-2020-01096-00/001-DEMANDA%20Y%20PODER\(1\).pdf?csf=1&web=1&e=5n0lrj](https://etbcsj.sharepoint.com/:b/r/teams/Secretaria2TRIBUNALADMINISTRATIVODELVALLE/Exp%20ORDINARIOS/76001-23-33-000-2020-01096-00/001-DEMANDA%20Y%20PODER(1).pdf?csf=1&web=1&e=5n0lrj). Ver folios 22-23.



6. Que, por tratarse de contratos sucesivos y no existiendo diferencia en el objeto mismo del contrato, todos ellos deben considerarse como un mismo y solo contrato de orden laboral.

7. Que se reconozca oficialmente que la prestación de sus servicios profesionales para las referidas entidades accionadas en realidad correspondían a una necesidad misional para ellas de carácter permanente.

8. Que, en consecuencia, de lo anteriormente expuesto, la Administración deberá reconocerle al actor una reparación del daño equivalente por las prestaciones sociales dejadas de percibir, para cuya liquidación se deberá tomar como referencia el valor previsto en el último contrato u orden de prestación de servicios, que sería el equivalente del salario.

9. Que se declare la obligación a cargo de sus empleadores de pagarle primas legales y extralegales, bonificaciones, vacaciones, cesantías con sus intereses, salarios moratorios y demás sumas que se le adeuden en virtud de dicho contrato realidad.

10. Que se declare que LA NACIÓN- MINISTERIO DE MINAS y ENERGÍA- AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA deben pagar las prestaciones legales correspondientes con Folio 23 la debida indexación y, a título de sanción moratoria, el equivalente a un día de salario por cada día de mora en el pago de dichas prestaciones, desde oportunidad en que se hicieron exigibles hasta el momento en que efectivamente se proceda a su cancelación.

CONDENAS

(Sin que esta estimación constituya límite a las pretensiones formuladas).

Que, en consecuencia de las anteriores declaraciones, se condene a la LA NACIÓN MINISTERIO DE MINAS y ENERGÍA- AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA a:

1. Reconocerle a mi mandante al pago de las prestaciones sociales dejadas de percibir, para cuya liquidación se deberá tomar como referencia el valor previsto en el último contrato u orden de prestación de servicios, que sería el equivalente del salario.

2. Reconocerle el pago de las primas legales y extralegales, bonificaciones, vacaciones, cesantías con sus intereses, salarios moratorios y demás sumas que se le adeuden en virtud de dicho contrato realidad.

3. Que se condene a las demandadas al pago de las cesantías correspondientes al tiempo transcurrido entre el 1 de julio de 2004 y el 5 de diciembre del 2017 (art. 40 del D.L. 045/78 y art. 17 de la L. 6ª/45).

4. Que se condene a las demandadas al pago de la indemnización moratoria por la no consignación de las cesantías de los años correspondientes a la relación laboral, en el respectivo Fondo (Ley 244 de 1995).

5. Que se condene a las demandadas al pago de los intereses de las cesantías generadas en virtud de este contrato realidad (art. 33. mod. L. 41/75, art. 3).

6. Que se condene a las demandadas al pago moratorio de cesantías por su no pago oportuno.

7. Que las demandadas deben al actor la compensación en dinero del valor de las vacaciones, desde el 1 de julio de 2004 hasta el 5 de diciembre del 2017.

8. Que se condene al LA NACIÓN- MINISTERIO DE MINAS y ENERGÍA- AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA a pagarle las prestaciones legales correspondientes con la debida indexación y, a título de sanción moratoria, el equivalente a un día de salario por cada día de mora en el pago de dichas prestaciones, desde oportunidad en que se hicieron exigibles hasta el momento en que efectivamente se proceda a su cancelación (art. 65 CST).

9. Que se condene a la empleadora estatal al pago de su parte correspondiente por las cotizaciones impagadas al Sistema Integral de Seguridad Social en salud y pensión desde el inicio de su relación laboral, reintegrándole a nuestro mandante el valor no compartido y por él pagado de manera exclusiva (en pensión, el ente estatal debe reconocerle el 75%; en salud, el 68%; el ARL todo, porque ese concepto es a cargo del empleador). Total pagado por el actor: \$ 45.546.264, discriminado así: salud: \$ 19.584.607; pensión: \$ 25.140.369; ARL: \$ 821.286. Por ello, el ente estatal debe reconocerle al actor los siguientes valores: por pagos en Salud: \$ 13.317.532; pensión: \$ 18.855.276, y ARL, la totalidad: \$ 821.286. Total a cargo del ente estatal: treinta y dos millones novecientos noventa y cuatro mil noventa y cuatro pesos M/Cte. (\$ 32.994.094).



10. Que las demandadas deben al actor la devolución del valor de retención en la fuente (hoy del 10%) por todos los pagos efectuados por concepto de honorarios durante todo el tiempo de la relación laboral, para lo cual se tienen documentados los datos del año 2015 por \$ 87.000 y del 2016 por \$608.000.
 11. Que se condene a las demandadas extra y ultrapetita.
 12. Que se condene al reconocimiento de la corrección monetaria como forma de compensar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda (art 187 PACA).
 13. Que se condene a las demandadas al pago de las costas que se llegaren a generar en razón de este proceso.
- (...).

II. CONSIDERACIONES

Corresponde al Despacho pronunciarse sobre el Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, a fin de verificar si el mismo cumple los requisitos legales, para ser admitido.

1.1. ANEXOS DE LA DEMANDA.

El artículo 166 del CPACA exige que la demanda debe estar acompañada de las pruebas que así lo demuestren, veamos:

“Artículo 166. Anexos de la demanda. A la demanda deberá acompañarse:

1. Copia del acto acusado, con las constancias de su publicación, comunicación, notificación o ejecución, según el caso. Si se alega el silencio administrativo, las pruebas que lo demuestren, y si la pretensión es de repetición, la prueba del pago total de la obligación.
Cuando el acto no ha sido publicado o se deniega la copia o la certificación sobre su publicación, se expresará así en la demanda bajo juramento que se considerará prestado por la presentación de la misma, con la indicación de la oficina donde se encuentre el original o el periódico, gaceta o boletín en que se hubiere publicado de acuerdo con la ley, a fin de que se solicite por el Juez o Magistrado Ponente antes de la admisión de la demanda. Igualmente, se podrá indicar que el acto demandado se encuentra en el sitio web de la respectiva entidad para todos los fines legales.
2. Los documentos y pruebas anticipadas que se pretenda hacer valer y que se encuentren en poder del demandante, así como los dictámenes periciales necesarios para probar su derecho.
3. El documento idóneo que acredite el carácter con que el actor se presenta al proceso, cuando tenga la representación de otra persona, o cuando el derecho que reclama proviene de haberlo otro transmitido a cualquier título.
4. La prueba de la existencia y representación en el caso de las personas jurídicas de derecho privado. Cuando se trate de personas de derecho público que intervengan en el proceso, la prueba de su existencia y representación, salvo en relación con la Nación, los departamentos y los municipios y las demás entidades creadas por la Constitución y la ley.
5. Copias de la demanda y de sus anexos para la notificación a las partes y al Ministerio Público. (Subraya y Negrillas fuera de texto)

Conforme a lo anterior, se advierte que, si bien el apoderado de la parte demandante aportó al plenario copia del acto administrativo demandado, esto es, la contestación radicada con el número 20195000265181 del 26 de diciembre de 2019², proferida por la Agencia Nacional de Minería, en la que se le negó el reconocimiento de un contrato realidad, lo cierto es que una vez revisados los anexos del libelo demandatorio se pudo constatar que no se allegó la constancia de notificación del mismo, por lo que se le solicitará a la parte actora para que lo aporte, toda vez que dicho documento es necesario para establecer el término de caducidad del presente medio de control.

²<https://etbcsj.sharepoint.com/:b:/r/teams/Secretaria2TRIBUNALADMINISTRATIVODELVALLE/Exp%20ORDINARIOS/76001-23-33-000-2020-01096-00/006-ANEXO%204.pdf?csf=1&web=1&e=IUf2uh>. Ver folios 76-77.



RADICACIÓN	: 2020-01096-00
Medio de control	: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Demandante	: JULIAN EDUARDO VELASQUEZ DAZA
Demandado	: NACIÓN – MINIMINAS Y ENERGÍA – AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

Por tanto, se inadmitirá la demanda en virtud de lo previsto en el artículo 170 del CPACA, para que en el término de diez (10) días, la parte actora allegue al plenario la constancia de notificación del acto demandado, so pena del rechazo de la demanda.

En consecuencia, después del estudio realizado,

SE DISPONE:

PRIMERO. INADMITIR la presente demanda conforme al artículo 170 del CPACA. Se concede el término **DIEZ (10) DÍAS** a la parte actora para que corrija el defecto señalado en la parte motiva de esta providencia, so pena del rechazo de la misma.

SEGUNDO: La subsanación y los demás memoriales que se presenten durante el trámite del presente proceso, deberán presentarse al correo electrónico de la Secretaría rpmemorialestadmvcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co, indicando con claridad el **NÚMERO DE RADICADO DEL PROCESO CON LOS 23 DÍGITOS SEPARADOS POR GUIÓN, NOMBRE DEL MAGISTRADO PONENTE, NOMBRE DEL DEMANDANTE y EL ASUNTO.**

Vencido dicho plazo, se dispone que retorne el expediente al Despacho para decidir lo pertinente.

TERCERO: RECONOCER personería para actuar como apoderados de la parte demandante, a los abogados **JORGE ECHEVERRY HOYOS**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.083.816 de Pereira, con Tarjeta Profesional No. 53.368 del Consejo Superior de la Judicatura y **JULIA IZABEL GIRALDO CARDONA**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 34.316.167 de Popayán, con Tarjeta Profesional No. 137.154 del Consejo Superior de la Judicatura, en los términos y para los efectos a que alude el poder presentado³.

Se advierte, que los mencionados profesionales del derecho no podrán actuar simultáneamente en el proceso, conforme a lo señalado en el artículo 75 del C.G.P.⁴

³[https://etbcsj.sharepoint.com/:b/r/teams/Secretaria2TRIBUNALADMINISTRATIVODELVALLE/Exp%20ORDINARIOS/76001-23-33-000-2020-01096-00/001-DEMANDA%20Y%20PODER\(1\).pdf?csf=1&web=1&e=VPE2hL](https://etbcsj.sharepoint.com/:b/r/teams/Secretaria2TRIBUNALADMINISTRATIVODELVALLE/Exp%20ORDINARIOS/76001-23-33-000-2020-01096-00/001-DEMANDA%20Y%20PODER(1).pdf?csf=1&web=1&e=VPE2hL). Ver folios 36-40.

⁴ **ARTÍCULO 75. DESIGNACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE APODERADOS.** Podrá conferirse poder a uno o varios abogados. Igualmente podrá otorgarse poder a una persona jurídica cuyo objeto social principal sea la prestación de servicios jurídicos. En este evento, podrá actuar en el proceso cualquier profesional del derecho inscrito en su certificado de existencia y representación legal. Lo anterior, sin perjuicio de que la persona jurídica pueda otorgar o sustituir el poder a otros abogados ajenos a la firma. Las Cámaras de Comercio deberán proceder al registro de que trata este inciso. **En ningún caso podrá actuar simultáneamente más de un apoderado judicial de una misma persona.**

El poder especial para un proceso prevalece sobre el general conferido por la misma parte.

Si se trata de procesos acumulados y una parte tiene en ellos distintos apoderados, continuará con dicho carácter el que ejercía el poder en el proceso más antiguo, mientras el poderdante no disponga otra cosa.

Podrá sustituirse el poder siempre que no esté prohibido expresamente.

El poder conferido por escritura pública, puede sustituirse para un negocio determinado, por medio de memorial.

Quien sustituya un poder podrá reasumirlo en cualquier momento, con lo cual quedará revocada la sustitución. (Negrillas fuera de texto)

RADICACIÓN
Medio de control
Demandante
Demandado

: 2020-01096-00
: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
: JULIAN EDUARDO VELASQUEZ DAZA
: NACIÓN – MINIMINAS Y ENERGÍA – AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA



NOTIFÍQUESE Y

CÚMPLASE

FERNANDO AUGUSTO GARCÍA MUÑOZ
Magistrado

GARU.